

ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS AGROINDUSTRIALES, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL

*Juan Pablo Higuera Gómez**

INTRODUCCIÓN

El presente artículo propone una estrategia metodológica de planificación para el fortalecimiento de cadenas agroindustriales, integrando principios de sostenibilidad, equidad y competitividad. Luego de un resumen de la estrategia de internacionalización de la economía colombiana y del marco conceptual del proceso metodológico de planificación, se presenta y explica paso a paso la metodología para el fortalecimiento de cadenas agroindustriales, las cuales se consolidan con la firma y puesta en marcha de Acuerdos Regionales de Competitividad; posteriormente se exponen algunas consideraciones acerca de sus alcances y beneficios.

La metodología está compuesta por siete etapas: organización y gestión para el cambio técnico; diagnóstico, estructura, dinámica y funcionamiento de la cadena; caracterización dinámica de productos y mercados; visión de futuro; estrategias y líneas de acción; firma de acuerdos regionales de competitividad y seguimiento y evaluación de compromisos. De esta manera se espera aportar a los lectores algunos elementos de valor o instrumentos que orienten la canalización

* Estudiante de Maestría en Desarrollo Rural, Universidad Nacional de Costa Rica. Coordinador Regional de Transferencia de Tecnología. Corpoica Regional Cuatro, Centro de Investigación "La Selva". Km. 7 vía a Llano-grande, Río Negro, Antioquia, Colombia. transferencia@epm.net.co

eficiente de recursos financieros hacia prioridades de inversión técnicamente definidas y el desarrollo de recursos humanos apropiados, para facilitar la sinergia proactiva con el capital social presente en las regiones o localidades; con una perspectiva de largo plazo por medio del manejo racional de los recursos naturales y el medio ambiente.

MARCO CONCEPTUAL

Al explorar el porqué de los procesos de la descentralización, muchos autores coinciden con Valverde (2000), es decir que se deben en parte a los procesos de globalización y apertura económica; otros como lo describe Pérez (2000), se deben a planteamientos de teóricos y planificadores del desarrollo regional, así como al triunfo de las teorías Neoliberales; a la pérdida del rumbo económico a partir de la deuda externa, Trejos (1998); al auge en las ideas neoliberales, impulsadas en parte por el fracaso del modelo socialista estatal inspirado en la Unión Soviética, Arango (1997) y a las exigencias de poderes hegemónicos y de entidades supranacionales como lo plantea Souza (2000).

De todos modos, sea como sea, esto evidencia cómo en América Latina desde mediados de los años ochenta, los países, en forma más o menos gradual iniciaron un proceso de reestructuración estatal traducido en cambios de los modelos de organización política, administrativa y económica, representado en la descentralización local, la modernización del Estado y la apertura de la economía nacional. Estas transformaciones respondieron a las motivaciones antes expuestas. A principios de la década de los noventa, un alto porcentaje de los países latinoamericanos aprobaron reformas constitucionales y leyes de modernización estatal. Incluso adoptaron nuevas Constituciones, las cuales redefinieron el papel del Estado, dando más poder y autoridad a los gobiernos locales, así como mayor capacidad de intervención en el crecimiento económico al sector privado.

Indudablemente la descentralización en América Latina aparece principalmente como reforma democrática, seguida por la reforma del Estado y como reforma de la participación social territorial, Valverde (2000). Teóricamente se podría decir que la descentralización es un proceso de democratización, pues así está concebido, incluso en la medida en que los grupos comunales y las asociaciones campesinas logren organizarse y en la medida que se desconcentre el poder, aparecerán

nuevos espacios políticos quienes harán que las propuestas sean concretas, globales y acordes con las necesidades de las comunidades.

Es así como la sociedad civil recobra cada vez más importancia, o por lo menos aparece con más fuerza reclamando espacios. De esta manera como lo manifiesta Valverde (2000), se visualizan movimientos cívicos, regionalistas, municipalistas y barriales, quienes de alguna manera reivindican la satisfacción de sus necesidades básicas, la participación en los procesos de decisión y de participación de las políticas. En esta dinámica la sociedad civil hace que la administración del Estado sufra modificaciones en sus formas de gestión y en la naturaleza de los problemas que trata. En este sentido considero de gran importancia y alcance las palabras de Rivera (1998), cuando afirma que la reestructuración democrática del estado y específicamente la descentralización, no tiene posibilidad de convertirse en realidad, si los actores involucrados en el proceso, no hacen suyo tal proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el año 1997 el Gobierno Nacional representado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, firma un convenio marco de cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA-ACT, Colombia, para la Competitividad del Sector Agroproductivo; como estrategia de internacionalización de la economía colombiana. En este contexto, se desarrollan los acuerdos sectoriales de competitividad de varias cadenas productivas con los que se busca establecer un marco de cooperación, en el corto, mediano y largo plazo, entre los sectores público y privado, para mejorar hacia el futuro la competitividad de la agricultura, la ganadería y la agroindustria colombiana, IICA y MADR (1999). En este sentido el Estado actúa como facilitador y coordinador de los procesos de participación de los diferentes actores y crea las condiciones necesarias para promover su articulación y para garantizar el ejercicio productivo y exitoso de los mismos.

El actual gobierno con su Plan de Desarrollo Cambio para Construir la Paz, resalta la construcción de capital social a través de modelos económicos, sociales y políticos participativos e incluyentes, para lo cual con la colaboración de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural; de Comercio Exterior; de Hacienda y Planeación Nacional se constituye el Programa de Oferta Agropecuaria Proagro, fruto del trabajo conjunto del sector privado y el gobierno nacional.

El gobierno encargó una serie de instituciones privadas, públicas y de carácter mixto, para jalonar la identificación, consolidación y desarrollo de núcleos agroempresariales o cadenas productivas regionales, las cuales tienen como meta a corto plazo la firma de voluntades materializada en Acuerdos Regionales de Competitividad, en los cuales confluyen las instancias sociales, institucionales, políticas, económicas y ambientales, Proagro (2000). Estos acuerdos, que deben ser el resultado de un proceso de concertación entre el sector privado presente en las regiones, la sociedad civil y el gobierno nacional y regional; deben contener una visión compartida sobre la problemática de competitividad de la Cadena, la visión de futuro del negocio en la región o localidad y un plan estratégico con líneas de acción para resolver los problemas de competitividad de la Cadena.

A continuación se presenta una estrategia metodológica para el fortalecimiento de cadenas agroindustriales, con lo cual se espera, aporte a los lectores algunos elementos de valor o instrumentos que orienten la canalización eficiente de recursos financieros hacia prioridades de inversión técnicamente definidas y el desarrollo de recursos humanos apropiados, para facilitar la sinergia proactiva con el capital social presente en las regiones o localidades; con una perspectiva de largo plazo por medio del manejo racional de los recursos naturales y el medio ambiente.

Antes de comenzar con la explicación de la estrategia, se podría definir el término de cadena agroindustrial, como el conjunto de componentes interactivos que agregan valor a los productos agrarios hasta colocarlos a disposición de los consumidores finales, Velásquez et al. (1997). Como núcleos agroempresariales se entiende el conjunto de empresas e instituciones ubicadas en un espacio geográfico determinado relacionadas entre sí por lazos de suministros de materias primas, presentación de servicios o provisión de infraestructura especializada y organizadas alrededor de una industria o sector líder, IICA (1999). Y como complejo productivo o cluster, una concentración sectorial y/o geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades estrechamente relacionadas con importantes y cumulativas economías externas de aglomeración y especialización, y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva, Ramos (2001).